



Rama Judicial
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
República de Colombia

Santiago de Cali, diez (10) nueve (9) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio No. 89

Expediente	76001-23-33-2020-01590-00
Acción	Popular
Accionante	HERNAN TORRES GONZALEZ ofihtg@hotmail.com
Accionada	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE EL CAUCA C.V.C. notificacionesjudiciales@cvc.gov.co
Vinculados	DISTRITO DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA njudiciales@valledelcauca.gov.co MINISTERIO DEL INTERIOR notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE procesosjudiciales@minambiente.gov.co lscamacho@minambiente.gov.co
Magistrado Ponente	Víctor Adolfo Hernández Díaz
Tema	Avoca conocimiento

1. ANTECEDENTES

El Juzgado Segundo Administrativo el Circuito Judicial de Buenaventura remite la demanda que en ejercicio de la acción popular contemplada en el canon 88 de la Constitución Política promoviera el señor HERNAN TORRES GONZALEZ contra la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE ANTIOQUIA, por la presunta vulneración de los derechos colectivos al ambiente sano, desarrollo urbano, y afectación a la acción urbanística en la regularización del uso del suelo.

La demanda fue inicialmente admitida por el juzgado mediante providencia del 25 de noviembre de 2019, impartándole el trámite previsto en la ley 472 de 1998.

En virtud del recurso de reposición formulado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el juzgado de conocimiento declaró la falta de competencia funcional para conocer del asunto y ordenó su remisión a esta Corporación, teniendo en cuenta que la demanda se dirige en contra de la

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, entidad del orden nacional.

Previo a decidir si se avoca conocimiento el Despacho hará las siguientes

2. CONSIDERACIONES

2.1. Jurisdicción y competencia para conocer de las acciones populares.

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones populares originadas en actos, acciones, y omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas; y “en los demás casos, conocerá la jurisdicción ordinaria civil”, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 472 de 1998.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley. 1437 de 2011), en relación con el conocimiento del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos por parte de Tribunales Administrativos, dispuso en su artículo 152 numeral 16, lo siguiente:

“ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...) 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, **contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.**” (Negritas por fuera del texto)

2.2. Naturaleza Jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales.

El artículo 23 de la Ley 99 de 1993, prevé:

DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Artículo 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

Exceptúase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley.”

La disposición en cita fue analizada por la Corte Constitucional en sentencia T – 945 de 2008, precisando, entre otros aspectos, que las Corporaciones Autónomas Regionales al estar integradas por entidades del orden territorial no significaba que hicieran parte de ellas o tuvieran su misma naturaleza, pues eran entidades del orden nacional en razón a que las funciones que

desempeñaban le concernían al Estado en su nivel central. Así lo explicó la Alta Corporación en cita:

“11. No siendo, pues, entidades territoriales, sino respondiendo más bien al concepto de descentralización por servicios, es claro que las competencias que en materia ambiental ejercen las corporaciones autónomas regionales, son una forma de gestión de facultades estatales, es decir, de competencias que emanan de las potestades del Estado central.

“Por ello la gestión administrativa que estos entes descentralizados llevan a cabo de conformidad con la ley, debe responder a los principios establecidos para la armonización de las competencias concurrentes del estado central y de las entidades territoriales. Específicamente, esta gestión no puede ir tan allá que vacíe de contenido las competencias constitucionales asignadas a los departamentos y municipios en materia ambiental y debe ejercerse en observancia del principio de rigor subsidiario anteriormente definido”

2.3. Del caso concreto.

El medio de control de la referencia propende por la protección de derechos e intereses colectivos, los cuales considera afectados por Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, entidad del orden nacional, por lo que el proceso debe ser conocido y adelantado por esta Corporación como lo estimó el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura, en consecuencia, se **avocará** conocimiento del asunto

Se procede a efectuar el control oficioso de legalidad conforme el artículo 207 de la ley 1437 de 2011, con el fin de garantizar el debido proceso.

El auto admisorio fue notificado a la parte demandada y las entidades vinculadas por correo electrónico el 10 de diciembre de 2019, remitiéndoles la demanda, anexos y la providencia que admitió la demanda.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entidad vinculada al proceso, formuló recurso de reposición contra el auto admisorio alegando violación al debido proceso, falta de competencia funcional y solicitó además la desvinculación de la entidad aduciendo que la C.V.C. goza de un régimen especial de autonomía y no está vinculada a dicho Ministerio, ni este es el superior jerárquico.

Respecto de la falta de competencia funcional fue declarada por el Juzgado de conocimiento y ordenando remitir el expediente a esta Corporación, encontrándose pendiente resolver sobre la violación al debido proceso que se fundamenta en que no se dio aplicación al inciso 5º del artículo 199 de la ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 612 del C.G.P, al tenerse en cuenta que el término de los diez días de traslado (artículo 22 ley 472 de 1998) comenzaran a correr al vencimiento del término común de 25 días después de la última notificación, por tanto, no fue otorgado a las partes el termino de 35 días.

En efecto, el término de 10 días, correrá al vencimiento de los 25 días previstos en el art. 199 de la Ley 1437 de 2011, en la forma señalada en la sentencia de unificación del 18 de marzo de 2018 radicado 2500023420002017-03843-01 de la Sección Primera del Consejo de Estado.

“En consecuencia, la notificación personal del auto admisorio de una demanda en acción popular, que se realice a la dirección electrónica de las entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil, deberá realizarse mediante mensaje dirigido al buzón electrónico a que se refiere el artículo 197 del CPACA, o a la dirección electrónica que los particulares tengan registrada en los registros mercantiles y dispuestas para recibir notificaciones judiciales, con copia de la providencia a notificar y de la demanda. Las copias de la demanda y sus anexos quedarán en la Secretaría a disposición del notificado y el traslado de los diez (10) días a que se refiere el artículo 22 de la Ley 472 de 1998, sólo comenzará a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de la última notificación, en los términos del artículo 199 del CPACA.

Ahora, se desprende de la constancia secretarial que obra en el expediente digital, que se dio aplicación al precedente judicial contabilizando los términos conforme el artículo 199 del CPACA, contabilizando los 25 días a partir del día siguiente de la notificación que vencieron el 7 de febrero de 2020 y el termino de traslado de diez (10) días que corrieron del 10 al 21 de febrero del mismo año, por lo tanto, no se observa vulneración al debido proceso.

Sin embargo, como quiera que se formuló recurso de reposición contra el auto admisorio y conforme el inciso cuarto del artículo 118 del C.G.P.¹ cuando en los eventos en los que se interpongan recursos contra la providencia que conceda un término, la presentación del mismo hace que dicho plazo se interrumpa, y los efectos de dicha situación no son otros que el término concedido vuelva a correr íntegramente.

Así las cosas, conforme al efecto que generó la interposición del recurso de reposición, esto es, la interrupción del término de traslado, de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 118 del C.G.P., dispone que en los eventos en los que se interpongan recursos contra la providencia que conceda un término, la presentación del mismo hace que dicho plazo se interrumpa, y los efectos de dicha situación no son otros que el término concedido vuelva a correr íntegramente.

Por lo anterior, y en virtud de la prevalencia del principio de legalidad, la naturaleza del proceso y para dar continuidad al trámite, se dispone que a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia empezará a correr el termino de traslado de diez (10) días. El referido termino correrá al vencimiento de los 25 DÍAS previstos en el art. 199 de la Ley 1437 de 2011, en la forma señalada en la sentencia de unificación del 18 de marzo de 2018 radicado 2500023420002017-03843-01 de la Sección Primera del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA**,

RESUELVE:

PRIMERO: AVOCAR el conocimiento de la demanda que en ejercicio de la acción popular promueve el **señor HERNAN TORRES GONZALEZ** contra

¹ “Cuando se interpongan recursos contra la providencia que concede el término, o del auto a partir de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la ley, este se interrumpirá y comenzará a correr a partir del día siguiente al de la notificación del auto que resuelva el recurso”

la **CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE C.V.C., DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MINISTERIO DEL INTERIOR Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.**

SEGUNDO:NOTIFÍQUESE la presente decisión por estados a fin de informarles el cambio de radicación de la acción y la decisión en esta providencia adoptada.

TERCERO: A partir del día siguiente a la notificación de esta providencia **empezará a correr el término de traslado de diez (10) días a las partes.** El referido termino correrá al vencimiento de los 25 DÍAS previstos en el art. 199 de la Ley 1437 de 2011, conforme lo dispuso en esta providencia.

CUARTO Comunicar al Ministerio Público (procjudadm18@procuraduria.gov.co) la existencia de la presente demanda, para que intervenga si lo considera conveniente, como parte pública en defensa de los derechos e intereses colectivos.

VICTOR ADOLFO HERNANDEZ DIAZ
Magistrado

AD VALLE DEL CAUCA
RAMA JUDICIAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA